

CRONICA DEL MES

MARZO-ABRIL

Como era anticipable, la dinámica de la coyuntura durante el mes de marzo se desarrolló en función primaria del proceso electoral, no obstante la ausencia de plataformas programáticas concretas de cara a la problemática nacional, y la apatía generalizada que, en parte debido a ello, en parte debido a que las elecciones constituían el tercer evento electoral en menos de 3 años, pareció privar en el electorado.

Tras la apertura, el primero de marzo, del periodo de propaganda para las elecciones de concejos municipales, el proceso electoral entró formalmente a su última etapa, sin que los partidos en contienda lograran sustituir el intercambio de diatribas por la articulación de planteamientos políticos conducentes a enfrentar con eficacia la crisis del país. Pese a las exhortaciones de la Iglesia y del propio Consejo Central de Elecciones, el cual hizo un "ferviente llamado" a los partidos "a fin de que realicen sus planteamientos ideológicos y políticos en una campaña de altura," el contenido de la propaganda siguió masivamente dominado por la crítica destructiva y las acusaciones personales, entre las cuales destacaron las dirigidas por la coalición ARENA-PCN contra aquellos "funcionarios que se están prevaleciendo de sus cargos para realizar campaña a favor del partido de su simpatía;" y contra la UPD, por su apoyo público al PDC, en violación al artículo 151 de la ley electoral.

En el marco de estos señalamientos, la ultraderecha aprovechó para reiterar sus acusaciones sobre la intervención de Estados Unidos en el proceso, sobre todo a raíz de la negativa del Departamento de Estado a la solicitud de visa del

mayor D'Aubuisson para asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora realizada en Washington, donde el presidente Reagan pronunció un discurso el 28 de febrero. Por otro lado, sin embargo, reaparecieron rumores sobre "importantes desacuerdos" entre la administración Reagan y el gobierno del presidente Duarte en torno a política económica, al punto que, según funcionarios de la embajada estadounidense, la Casa Blanca estaba persuadida de que "una victoria de Duarte no sería buena," puesto que, al verse respaldado por una mayoría en la asamblea, podría rehusar negociaciones con la oposición de derechos y "propugnar un programa económico populista."

En contrapartida, los obispos norteamericanos, presididos por el cardenal de Chicago y el arzobispo de Nueva York, quienes visitaron el país a comienzos del mes, manifestaron que el presidente Duarte les había parecido "sumamente notable por sus aparentes esfuerzos en favor de la paz;" destacaron que "la Iglesia tiene una gran libertad para actuar: los prelados salvadoreños pueden decir lo que piensan, y a veces hasta critican al gobierno;" y enfatizaron que "todos con los que hablamos, sin excepción, coincidieron en que ha habido mejoras sensibles y, aunque todavía falta mucho por recorrer, la dirección parece ser la correcta."

La impresión fundamentalmente favorable que los obispos se formaron acerca del gobierno, sin embargo, no logró percibir el nuevo periodo de agitación al cual entró el movimiento sindical, en buena parte a consecuencia de medidas adversas del gobierno, pero, sobre todo, como profun-

dización de una larga lucha reivindicativa cuyas plataformas venían de bastante atrás. En el marco de tal efervescencia laboral, se destacaron las denuncias del Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC), afiliado a la FESINCONSTRANS (miembro de la UPD), sobre anomalías salariales y medidas de represión física por ejercer el derecho de huelga; las demandas de los trabajadores del Sindicato de Empresa de la Refinería de Azúcar Salvadoreña (SETRAS), para que INAZUCAR les proporcionara azúcar cruda, que generaron un amplio movimiento de solidaridad de parte de los sindicatos avícola, El Dorado, textil (Kenaf), del pan, de costureras, de sastres, de la industria mecánica (STIMMB) y de la industria del mueble (SIMAS); la lucha reivindicativa desarrollada por el STISSS, SELSA, STIMMES y SEGGES, afiliados a la Asociación Sindical Independiente de El Salvador (ASIES); los paros en el Banco de Crédito Popular, CREDISA y Banco Salvadoreño, por la captura de los dirigentes de SIGEBAN, Roberto Antonio Morales Guatemala y Sandra Guadalupe Martínez, quienes luego fueron liberados; las amenazas de paro de ANTEL por la captura de Edwin Morales Guatemala, liberado también finalmente por la Policía Nacional; y las presiones para imponer su plataforma reivindicativa por parte del Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales (CCTEM), integrado por AGEMHA, SIGEBAN, AGEPYM, STISSS, SITINPEP, SETA y ANDES. Particular relevancia cobraron los casos de estos dos últimos. ANDES decretó un paro el 12 en los tres turnos de educación básica en todo el país, en protesta por el atraso en el pago de los sueldos de febrero y la no resolución de sus demandas médico-hospitalarias. El 13 los trabajadores de SETA (Sindicato de Empresa de Trabajadores de ANDA) iniciaron una huelga al fracasar las negociaciones con la dirigencia de ANDA en torno a un pliego de 28 peticiones, 18 de las cuales fueron descalificadas por el presidente de ANDA, quien las consideró de carácter "no laboral."

No obstante, el enfrentamiento más fuerte entre la gestión democristiana y el movimiento laboral giró en torno al veto dado el 12 por el presidente Duarte al Proyecto de Ley General de Cooperativas, presentado por la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador (COACES) y aprobado por la asamblea legislativa el 21 de febrero. El proyecto contó desde un inicio con el respaldo de la Federación Nacional

de Cooperativas Agropecuarias (FENACOA), la Federación Nacional de Cooperativas de la Industria del Transporte (FENACITES), la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES) y la Federación de Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria (FEDECOOPADES), así como de la Asociación Nacional Campesina (ANC) y la Federación Salvadoreña de Cooperativas de la Reforma Agraria (FESACORA). Según el presidente del Instituto Salvadoreño de Fomento Agropecuario (INSAFOCOOP), Jorge Ruiz Camacho, la ley rescataría a más de 600.000 personas de la población económicamente activa, quienes se estaban desempeñando improductivamente, y permitiría la incorporación al cooperativismo de los sectores de seguros, minas, artesanías, comerciales, agroindustriales, etc. Cuatro días antes del veto, dichas organizaciones convocaron a la tercera marcha nacional de cooperativas, la cual contó con la participación de más de 10.000 afiliados y en el curso de la cual, el movimiento cooperativo externó su "profunda preocupación" por el hecho de que el presidente Duarte "y sus ministros sólo intervengan para favorecer y resolver los problemas de los económicamente fuertes, mientras el cooperativista no goza de iguales prioridades," y exigió la resolución de "todas las peticiones por las que venimos luchando desde hace años."

No obstante estas presiones, el presidente Duarte consideró que, aunque estaba "convencido de todas las ventajas del cooperativismo y del apoyo que merece el esfuerzo que realizan quienes se organizan en ese tipo de asociaciones," el proyecto de ley era incongruente con la Constitución y el sistema jurídico del país, en tanto facultaba a las cooperativas para participar en la toma de decisiones del Estado en materia de cooperativismo y las eximía desde el momento de su inscripción, con carácter indefinido, de todos los impuestos "y además contribuciones al Estado," lo cual atentaba "contra el desarrollo económico y social de la nación y contra el sistema fiscal." Por tanto, en base a éstas y otras razones, procedió a vetar el proyecto de ley, sin reparar demasiado en la advertencia de COACES, FENACOA y la ANC de que ello le haría "perder credibilidad ante más de 300.000 cooperativistas, muchos de los cuales lo llevaron al poder con su voto."

En un orden de sucesos paralelos al desarrollo del movimiento laboral, el gobierno de-

bió enfrentar en otro flanco de problemas las tensiones desencadenadas al interior de la Fuerza Armada por la remoción del coronel Julio César Yánez como comandante de la Sexta Brigada de Infantería, con sede en Usulután, y el asesinato del coronel Ricardo Aristides Cienfuegos, jefe de COPREFA. Por lo que respecta al primero, la prensa divulgó a comienzos del mes un cable de la UPI firmado por el corresponsal Michael Drudge, en el cual éste revelaba que "oficiales conocidos de Yánez, que hablaron bajo la condición de no ser identificados, dijeron que el coronel estaba robando dinero del programa auspiciado por Estados Unidos para reconstruir el departamento de Usulután," como parte del plan estratégico global de la Comisión Nacional de Restauración de AREAS (CONARA), financiado casi totalmente por la AID.

En respuesta a esta versión, la embajada de Estados Unidos y altas autoridades militares salvadoreñas señalaron que los fondos proporcionados por la AID eran administrados por agencias civiles del gobierno de El Salvador y no por organismos militares, mientras que el ministerio de defensa aclaró que la remoción del coronel Yánez y su traslado como agregado militar a Argentina obedecían a "razones propias del servicio en base a un sistema de rotación establecido por la Fuerza Armada," al tiempo que dejó "a criterio del acusado" hacer uso de "sus facultades legales, que como ciudadano le corresponden, para defender su honorabilidad." En la misma línea, el coronel Ricardo A. Cienfuegos, jefe de COPREFA, rindió explicaciones más detalladas sobre la manera como se administraba la ayuda norteamericana y enfatizó que "los únicos recursos que son manejados directamente por el estado mayor conjuntamente del ejército consisten en materiales y equipo." Al ser interrogado sobre el caso del coronel Yánez, el coronel Cienfuegos respondió que "la única verdad que puedo decirles es lo publicado en un diario matutino, lo aclarado por el ministerio de defensa y lo declarado por el señor ministro de defensa." Menos de 48 horas después de estas declaraciones, el coronel Cienfuegos moría asesinado a balazos mientras jugaba tenis en el Círculo Deportivo Internacional. Aun cuando sus victimarios dejaron sobre su cadáver una bandera con las siglas "FPL" y el Frente "Clara Elizabeth Ramírez" (FCER), en disidencia con el FMLN, emitió un comunicado reivindicando la acción, las circunstancias en que ésta aconteció fueron tan oscuras

como para que diversos medios políticos y periodísticos externaran sus dudas sobre los verdaderos responsables del asesinato, dudas tanto más verosímiles cuando el día anterior al atentado, el coronel Cienfuegos había dado a conocer un informe de la oficina de investigaciones del ejército de Estados Unidos sobre el accidente aéreo en el cual murió el coronel Domingo Monterrosa. Según el informe, el helicóptero en que éste viajaba, acompañado de otros miembros del alto mando, no sufrió desperfectos mecánicos ni fue ametrallado por el FMLN, sino que explotó en el aire a consecuencia de una bomba colocada tal vez en el equipo que Monterrosa presuntamente había capturado a Radio Venceremos.

En el terreno militar, sin embargo, las tensiones internas suscitadas por estos acontecimientos no impidieron a la Fuerza Armada el desarrollo del Plan Libertad, en el curso del cual fueron desplegados 10.000 efectivos a efecto de "garantizar el normal desarrollo de las elecciones en todo el territorio nacional." Además de llevar a cabo la tercera fase de la operación Torola V en el norte de Morazán, el ejército dio inicio en la zona de Cinquera, con participación del Batallón Bracamonte, a la operación Cienfuegos, en memoria del coronel Ricardo A. Cienfuegos. En el curso de ella, calificada por el general Adolfo O. Blandón como el operativo de "mayor éxito en cuanto a la incautación de armas y medicamentos de la guerrilla" en los últimos meses, el ejército descubrió una red de "tatús" en las inmediaciones del caserío San Antonio, y decomisó 110 fusiles (70 M-16 y el resto FAL y G-3), una ametralladora M-79, un radio de comunicación, cargas de TNT, cerca de 200 granadas de fabricación soviética y otros artefactos.

No obstante estos operativos, las valoraciones del alto mando sobre el curso de la guerra no parecieron reflejar objetivamente la correlación de fuerzas en el campo de batalla. De hecho, el FMLN mantuvo un ritmo de actividad suficiente para poner en entredicho el triunfalismo de las afirmaciones oficiales, como se evidenció en el ataque que, en la madrugada del 15, efectuaron entre 300 y 400 guerrilleros, divididos en dos columnas, a las instalaciones de comunicaciones ubicadas en la cúspide de El Picacho (volcán de San Salvador), tras escalarlo cargados con morteros de 81 mm, cañones de 90 mm, ametralladoras y fusilería. Al parecer, una de las columnas avanzó desde el sur, por la carretera que de Santa Tecla conduce al volcán, mientras que la

otra partió de la parte norte de éste, cerca de Quezaltepeque. En la cumbre, 52 agentes de la Guardia Nacional custodiaban las antenas de los canales de televisión privados y estatales, así como las antenas de diversas radiodifusoras, radioaficionados, oficinas de ANTEL y antenas de telecomunicaciones del ejército. Tras el ataque, los agentes fueron reforzados por unos 2,500 efectivos de la Primera Brigada de Infantería y del regimiento de caballería, apoyados por aviones C-47 y helicópteros UH-1H, los cuales comenzaron a ametrallar intensamente toda el área comprendida en las inmediaciones del volcán. Aunque una parte de la Fuerza Armada señaló que el FMLN había "fracasado rotundamente" en su intento de destruir las instalaciones, como saldo de la acción murieron 7 guardias nacionales y fueron dañadas parcialmente las antenas de los canales 8 y 10 y destruidas las oficinas de ANTEL.

No obstante, el grueso de la actividad militar del FMLN se concentró en la continuación del sabotaje al evento electoral mediante la destrucción de oficinas de ANTEL y registros municipales. La cifra de alcaldías destruidas durante febrero y marzo ascendió a 23 la víspera de los comicios: San Matías, en La Libertad; Tejutla, en Chalatenango; San Bartolomé Perulapía, en Cuscatlán; Tejutepeque, en Cabañas; Alegría, Tecapán, California, Santa Elena y San Dionisio, en Usulután; San Isidro, Osicala, Guatajiagua, Yamabal, San Carlos y Sociedad, en Morazán; Lislique, Nueva Esparta, Polorós, Concepción de Oriente, El Sauce, Yucuaiquín y Yayantique, en La Unión; y San Rafael Oriente, en San Miguel.

En el medio de este intenso sabotaje guerrillero, así como de crecientes dificultades técnicas del Consejo Central de Elecciones (CCE) para ultimar los detalles del evento electoral, las elecciones se realizaron finalmente en la fecha programada, el último día del mes.

A pesar del amplio dispositivo de seguridad desplegado por la Fuerza Armada en todo el territorio nacional, el presidente Duarte declaró que se había informado de por lo menos 17 "actos terroristas" el propio día de los comicios, mientras que el COPREFA informó sobre diversas acciones de hostigamiento del FMLN en San Salvador, Chirilagua, San Gerardo, Chapeltique, San Jorge, San Luis de La Reina, Osicala, Carolina, San Antonio El Mosco, Jalpatagua, El Semillero, Tecoluca, El Paisnal y San Fernando.

En este último lugar, los enfrentamientos fueron tales que un helicóptero debió recoger las urnas y trasladarlas a San Salvador antes de que concluyera la votación. Por su parte, CAESS informó que la destrucción de dos torres conductoras de cables de 23 mil voltios produjo la suspensión de la energía en varias zonas del norte de San Salvador y Chalatenango hasta las seis de la tarde. Otros apagones ocurrieron en Santa Ana, cuando las juntas receptoras se disponían a efectuar el escrutinio local, y en numerosos municipios de San Vicente, donde la votación concluyó a las cuatro de la tarde por falta del fluido eléctrico.

Como parte también del sabotaje, el FMLN decretó a partir del 28 un nuevo paro del transporte a nivel nacional, lo cual habría reducido a un 20 por ciento la circulación de vehículos en las carreteras Panamericana, del Litoral y Ruta Militar; mientras que, según los despachadores de buses, el 90 por ciento de las unidades no trabajó el 31, y las que lo hicieron se limitaron a viajes esporádicos a poblaciones cercanas.

Por su parte, en un intento por reducir la eficacia del boicot guerrillero, el gobierno decretó que las urnas de votación de 20 municipalidades consideradas como "poblaciones fantasma" o controladas por el FMLN, fueran trasladadas a municipios vecinos que reunieran condiciones de seguridad para el evento, o a sus respectivas cabeceras departamentales. En estas circunstancias, fueron trasladadas las urnas de Joicoatique, Meanguera, Torola, Joateca, Arambala, El Rosario, Perquín, y San Fernando, en Morazán; Arcatao, Nueva Trinidad, Las Vueltas, San José Las Flores, San Isidro Labrador, San Antonio La Cruz y San Antonio Los Ranchos, en Chalatenango; Jutiapa y Cinquera, en Cabañas; Tenancingo y Oratorio de Concepción, en Cuscatlán; y Nuevo Edén de San Juan, en San Miguel.

A juicio de varios observadores políticos, sin embargo, las dificultades mayores enfrentadas por el evento electoral no procedieron del FMLN, sino de la desorganización logística con que el Consejo Central de Elecciones elaboró y distribuyó el paquete electoral, de tal manera que "la guerrilla no tuvo necesidad de boicotear el proceso, porque el mismo Consejo se encargó de obstaculizar a los votantes." Entre otras disposiciones, el Consejo Central de Elecciones dificultó la asistencia masiva del electorado al decretar que los votantes debían "trasladarse al municipio de su domicilio según la cédula, o no votar,"

y prohibir simultáneamente el "transporte masivo interdepartamental" el día de los comicios, lo cual impidió a la mayoría de partidos el traslado de sus simpatizantes. Adicionalmente, muchos electores potenciales no pudieron ejercer el sufragio debido a que varios listados fueron enviados a lugares donde no correspondían; a la transcripción equivocada de nombres y números de cédulas, o simplemente a que sus nombres no aparecieron en las listas.

Con todo, según informes preliminares del Consejo Central de Elecciones, habrían votado 1.1 millones de electores: 965.000 de ellos habrían sido votos válidos y aproximadamente 75.000 nulos. En relación a un cuerpo electoral estimado en 2.7 millones de votantes potenciales, la participación obtenida pareció mostrar amplios márgenes de abstencionismo, incluso tomando en cuenta los 600.000 salvadoreños comprendidos en el cuerpo electoral, pero cuya asistencia a las urnas estuvo imposibilitada por residir en el exterior.

De esta suerte, los comicios del 31 habrían cerrado el proceso de recomposición del poder formal del Estado iniciado tras el golpe del 15 de octubre de 1979. Como resultado de ellos, los partidos de derecha habrían sufrido un importante descalabro en tanto instrumentos políticos de los intereses económicos de la gran empresa privada, sin que ello implicara necesariamente también un debilitamiento proporcional de ésta, cuando menos en su capacidad de vetar cualquier proyecto político y económico que pretenda estructurarse en función de las mayorías populares.

Sin pretender negar la consolidación del poder formal del PDC derivada del evento electoral, los comicios no presentaron evidencias de que el verdadero poder hubiese sido puesto en juego en ellos; mientras que, de cara al problema fundamental del conflicto, tampoco desataron procesos que coadyuvaran a su finalización. Rota el 31 de marzo la disyuntiva entre diálogo y elecciones, que pareció dominar la coyuntura en los meses precedentes, el evento electoral fue también arrebatado finalmente por el remolino de la guerra.

El PDC se adjudicó un triunfo holgado la noche misma de los comicios. Según lo expresara Castillo Claramount, el partido tenía "suficiente base técnica y metodológica para poder afirmar que hemos ganado las elecciones y sacado la

mayoría en la Asamblea; ahora sí nos dedicaremos tranquilos a realizar esfuerzos gigantescos durante los próximos tres años." El centro de cómputo del PDC adjudicó 33 escaños legislativos al partido, frente a 25 a ARENA-PCN y uno para AD y otro para PAISA. En lo relativo a concejos municipales, el PDC aseguró haber ganado el 75 por ciento de las alcaldías, entre ellas 12 de las 14 cabeceras departamentales.

Si los resultados fueron sorpresivos para los democristianos, lo fueron aún más para la coalición la cual, por boca del mayor D'Aubuisson, había vaticinado que obtendría 34 diputados y el 80 por ciento de las municipalidades. Voceros del PCN declararon el primero de abril que "no alcanzaban a comprender" su derrota en Cuscatlán, San Vicente, Morazán, Sonsonate y Cabañas, donde no obtuvieron ningún diputado, mientras que en Usulután, San Miguel, La Unión, La Paz, Chalatenango y Ahuachapán solamente obtuvieron uno, y dos en San Salvador.

En la búsqueda de justificaciones a la derrota, Armando Calderón Sol (ARENA) indicó que "en oriente disminuyó la votación de nuestro partido porque fue víctima del oficialismo del PDC," el cual convirtió en colores verdes los símbolos del IRA, FIGAPE, BFA, FEDECREDITO, etc." y "hasta realizó concentraciones en oficinas públicas." Otros voceros de ARENA denunciaron que en Apastepeque, Tecoluca, Guadalupe y varios municipios más de San Vicente, los camiones de PRIDECO, MAG, FINATA, ISTA y otras dependencias oficiales "estuvieron llevando y trayendo gente de los cantones;" que se estuvo pagando hasta 25 colones a quienes votaran por el PDC, y que se expidieron cédulas fraudulentas en las alcaldías de San Vicente, Santa Clara y otras municipalidades. Por su lado, Morán Castaneda (PCN) denunció constarle que en Ahuachapán los presidentes de ANDA y del ISTU "andaban en sus respectivas cherokees en un desplante de recursos," y señaló haber oído que "el propio Presidente Duarte anduvo presionando psicológicamente a los electores en poblaciones de oriente." La coalición añadió denuncias de que en Morazán "aparecieron papeletas marcadas a favor del PDC, sin ni siquiera haberse separado unas de otras" y que "en los municipios de Corinto, San Carlos, Guatajiagua, Yamabal, Cacaopera, San Isidro, San Simón, Gualococti y Lolotiquillo, se hizo caso omiso del registro de ciudadanos y se permitió el voto indiscriminado y que en las

poblaciones de San Juan Opico, Sacacoyo, La Libertad, San Matías y Colón, aparecieron urnas con más de 500 votos, sin que correspondieran a la numeración asignada.”

En base a éstos y otros hechos que, según la coalición, habrían alterado “en forma significativa los resultados,” los dirigentes Roberto D’Aubuisson y José Manuel Pacas, a nombre de ARENA, y Raúl Molina Martínez, por el PCN, interpusieron el 2 de abril, ante el Consejo Central de Elecciones, recurso de nulidad de los comicios. En el documento señalaban haber confiado en que “las elecciones serían libres, sin ninguna clase de presiones para el electorado” y “confiábamos también en la apoliticidad de la Fuerza Armada.” Dicha confianza, empero, se vio defraudada por las violaciones a la ley electoral “de parte de los funcionarios miembros del PDC que, empezando por el ciudadano presidente de la República y ministros del Estado, se prevalecieron de sus cargos e hicieron abierta propaganda a los candidatos de tal partido,” al punto que “el oficialismo reapareció en una forma como nunca antes se había visto en nuestro país.”

En respuesta a la solicitud de impugnación, el presidente del Consejo Central de Elecciones la calificó de “delito de lesa patria” y acusó a la coalición de “desestabilizar el proceso y no querer reconocer un sacrificio de la Fuerza Armada, que puso todo su empeño para la pureza, seguridad y garantía del evento.” Por su parte, pese a los desmentidos del mayor D’Aubuisson de que la coalición pretendiese involucrarlos en el fraude, el alto mando castrense emitió el 3 un comunicado de respuesta a la “desconfianza” que el recurso de nulidad dejaba entrever “sobre la correcta actuación de la Fuerza Armada.” En el comunicado, la institución castrense reafirmó que “jamás podrá parcializarse, ni abandonar su condición de institución apolítica, obediente y no deliberante,” y recalcó que “en todo momento se ha mantenido dentro de los límites de la institucionalidad” y realizado “un esfuerzo especial y un sacrificio permanente para facilitar la plena realización de los comicios.” En tono todavía más terminante, el general Vides Casanova declaró en la conferencia informativa que siguió a la lectura del comunicado que “no aceptamos el que se quiera involucrar al ejército en una actuación en la que lo único que ha hecho es mantener el orden a costa del sacrificio de 79 muertos, más de 200 heridos y 6 desaparecidos;” enfatizó que “las elecciones no son juego de naipes, que

pueden repetirse a cada instante” y manifestó la disposición del ejército a “salir a la calle a poner orden si las circunstancias así lo exigen.” Momentos después, el Consejo Central de Elecciones anunció su decisión unánime de declarar improcedente el recurso de nulidad, no sin reiterar enfáticamente que las declaraciones del alto mando no habían influido en el dictamen.

A la vista del rechazo de la impugnación, la coalición optó entonces por manipular el escrutinio como instrumento de presión para reducir la amplitud de la victoria democristiana y negociar la distribución de alcaldías o, por lo menos, para retardar la adjudicación oficial del triunfo al PDC. Pasadas 3 semanas después de los comicios, el Consejo Central de Elecciones aún no había ofrecido los resultados oficiales, no obstante el incremento de las críticas de diversos sectores sociales por la tardanza con que se estaba efectuando el escrutinio. Méndez Azahar, miembro del Consejo Central de Elecciones, admitió que el pueblo tenía “justa razón” al protestar por ello, pero enfatizó que “si ha habido algún retraso ha sido por las intervenciones duras y fuera de tono de los representantes de los partidos políticos.” Interpretando las críticas como alusión tácita a las continuas impugnaciones presentadas por ARENA, la dirigencia de dicho partido adujo que estaban apareciendo “una serie de anomalías que ameritan un examen cuidadoso, con el propósito de que las irregularidades que se están detectando se cuantifiquen para determinar hasta dónde pudieran incidir en los resultados.” No obstante, los resultados preliminares ofrecidos por el Consejo el 20 de abril confirmaron la distribución de diputados anunciada extraoficialmente por el PDC al día siguiente de los comicios: 33 diputados para el PDC, 25 para la coalición ARENA-PCN (12 de ellos para el PCN); 1 para AD y 1 para PAISA. Según los resultados provisionales difundidos 5 días después, 1.101.606 electores habrían depositado su voto en las elecciones para diputados (965.231 válidos, 57.690 abstenciones, 74.007 nulos y 4.678 impugnados; aparte de 1.452.528 votos no utilizados y 5.866 faltantes); y 1.128.121 en las de alcaldes (982.766 válidos, 66.148 abstenciones, 74.883 nulos, 4324 impugnados; 1.440.193 no utilizados y 10.186 faltantes). En la distribución de alcaldías, el PDC ganó 153 municipalidades; ARENA-PCN, 108; y PAISA 1.

Además de reafirmar a la Fuerza Armada como la institución en cuyas manos se concentra

la mayor cuota de poder real al interior del país, y de inaugurar una nueva recomposición del poder formal a nivel de asamblea legislativa y concejos municipales, con clara hegemonía del PDC, tales resultados desataron un profundo reacomodo de las fuerzas políticas partidistas, particularmente al interior de las dirigencias de ARENA y el PCN. Inmediatamente después del evento, dirigentes de ambos partidos expresaron sus dudas respecto de si les hubiera convenido más participar solos que en coalición, ya que, en el primer caso, al menos hubieran podido medir su fuerza real.

De parte de ARENA, los diputados Calderón Sol y Salguero Gross señalaron la pertinencia de realizar una "autocrítica interna" y reestructurar el consejo ejecutivo nacional del partido (COENA), a lo cual el diputado Héctor Araujo agregó que era "nefasto que por los votos de nuestro partido el PCN haya sacado diputados" aprovechando el acuerdo suscrito con el mayor D'Aubuisson" de que los primeros diputados por los departamentos de San Miguel, La Unión, Chalatenango, Ahuachapán, La Paz, Sonsonate y La Libertad," 7 en total, le pertenecerían, cuando de hecho obtuvo menos votos que ARENA en todos ellos. En la misma línea, la diputada Salguero Gross calificó la actuación del PCN de "traición a ARENA y al pueblo Salvadoreño," a lo cual Morán Castaneda (PCN) replicó que tales acusaciones no eran "nada serias" y que "únicamente contribuyen a dividirnos."

Por su parte, el diputado Hugo Barrera, desplazado del COENA a finales del año pasado por presuntas discrepancias con el mayor D'Aubuisson, declaró que "el resultado de las elecciones es el que nos merecemos por haber cometido el desatino de no prepararnos adecuadamente en relación a la promoción popular y, especialísimamente, a la organización política, que dejó mucho que desear." "Como resultado de ello" —añadió— "el fracaso de la coalición será indudablemente más costoso para ARENA, ya que el PCN tiene más posibilidades de llegar a un tipo de arreglo con el PDC y salir adelante con sus ambiciones políticas." En apoyo de la predicción, voceros del PDC confirmaron versiones de que se estaba negociando un "pacto político" con el PCN, en virtud del cual varios cuadros pecenistas se incorporarían a algunas instituciones autónomas y semi-autónomas, así como a la directiva de la asamblea legislativa. Simultáneamente, el consejo ejecutivo del PCN de-

sautorizó a Raúl Molina Martínez por haber presentado junto con ARENA el recurso de nulidad de las elecciones, sin haberlo consultado con el partido, y procedió a sustituirlo en el cargo de secretario general por Hugo Carrillo. Este negó las versiones de que se estuviera negociando un pacto con el PDC, pero indicó que de haber algún ofrecimiento concreto "el partido analizaría si le conviene o no tomar esos puestos." Al mismo tiempo, respecto de las acusaciones de ARENA, recordó que "el compromiso de la coalición terminaba el 31 de marzo" y que "ahora el PCN estará apoyando indistintamente a aquel partido que tenga la razón y que esté planeando medidas que vayan en beneficio del pueblo salvadoreño."

Por otro lado, más allá de las pugnas interpartidistas, y una vez pasada la efervescencia electoral, la guerra volvió a ocupar el primer plano de la vida nacional, en el marco de renovados esfuerzos de las partes en conflictos por reajustar estrategias y tácticas para el nuevo momento.

De parte del FMLN, el comandante Joaquín Villalobos expresó a través de Radio Venceremos que el ejército salvadoreño era un "problema militarmente resuelto" y que el reto planteado al FMLN por la nueva coyuntura consistía en socavar su base de sustentación: el apoyo norteamericano, sin el cual "la correlación de fuerzas habría cambiado bruscamente desde hace bastante tiempo." En tal sentido, lo principal para el FMLN en el momento post-electoral no lo constituía la realización de "operaciones espectaculares," sino la dedicación a una efectiva guerra de desgaste.

Por su parte, voceros de la Fuerza Armada expresaron que la nueva táctica de contrainsurgencia en las operaciones simultáneas le estaban permitiendo al ejército retomar la ofensiva en la guerra, a la vez que generando enorme desmoralización en las filas del FMLN. Según informes del COPREFA, durante el mes de abril la Fuerza Armada habría efectuado intensos operativos en la zona transversal norte de Cuscatlán, así como en el sur de Usulután, norte de San Vicente, noreste de Chalatenango y noreste de San Miguel, y en el triángulo comprendido entre Santa Ana, La Libertad y Chalatenango.

Entre los operativos, se destacó a mediados del mes el montado en Cuscatlán por tropas de la Primera Brigada de Infantería y el Destacamento Militar No. 5, con apoyo de la fuerza aérea, en el curso del cual fueron bombardeadas y ametralla-

das las poblaciones de San José de Guayabal y Tenancingo; así como el desmantelamiento de un campamento guerrillero en Tierra Blanca, Jiquilisco (Usulután), por unidades del Batallón Atonal.

Por otro lado, para impedir la expansión del teatro de guerra hacia la zona occidental, donde desde el año pasado el FMLN había estado haciendo esfuerzos para consolidar el Frente "Feliciano Ama," la Fuerza Armada emprendió en la última semana de abril una triple operación de contrainsurgencia en Santa Ana, La Libertad y Chalatenango, con participación de 4.000 efectivos. Simultáneamente, 3 operativos más de gran envergadura fueron realizados para impedir los reagrupamientos de unidades de combatientes guerrilleros y cortar las líneas de abastecimiento del FMLN: uno en el área comprendida entre el cerro de Guazapa y Suchitoto; otro en la zona nororiental del ingenio Jiboa, en San Vicente y un tercero en la zona sur de Usulután. Según un balance ofrecido el 24 por el general Blandón, jefe del estado mayor, la Fuerza Armada habría realizado a lo largo del primer trimestre del año 35 operaciones mayores en las 6 zonas definidas militarmente como de "persistencia y expansión guerrillera." Según el balance, entre el 1 de enero y el 24 de abril, la Fuerza Armada habría causado al FMLN 239 muertos, 93 heridos y 196 capturados. En el mismo periodo, las bajas reconocidas por el ejército habrían sido 97 muertos, 119 heridos y 6 desaparecidos.

Además de las bajas causadas al FMLN, el ejército informó que 83 combatientes guerrilleros y 181 elementos de masas se habían entregado a las autoridades militares; y que habían sido capturados numerosos cuadros intermedios e importantes elementos de dirección de la guerrilla, entre ellos la comandante Nidia Díaz, capturada el 18 en la zona de Cerros de San Pedro, al norte de San Vicente, y el comandante Miguel Castellanos, del comando central de las FPL, quien, según información de Radio Venceremos, había sido capturado el 11 en las afueras de Zacatecoluca en circunstancias no especificadas. Declaraciones ofrecidas por el general Blandón el 25, sin embargo, indicaron que no se trató de una captura, sino que Castellanos había desertado de las FPL y buscado protección en las autoridades.

Como era previsible, la Fuerza Armada no desaprovechó la oportunidad para explotar propagandísticamente estos golpes e intensificar la guerra psicológica contra el FMLN, intentan-

do mostrar que la desmoralización empezaba a cundir en las filas guerrilleras al grado que incluso sus cuadros dirigentes estaban desertando masivamente y proporcionando información conducente a nuevas capturas y al desmantelamiento de numerosos campamentos.

Por lo que respecta al proceso de diálogo entre el gobierno y los frentes, las elecciones parecieron inicialmente abrir las puertas a la reanudación de las conversaciones. Tras ellas, diversos sectores sociales y políticos del país se pronunciaron en favor de la solución negociada al conflicto, al considerar que, cerrada la coyuntura electoral, la principal disyuntiva nacional se planteaba entre el diálogo o la profundización y prolongación de la guerra. Un día antes de los comicios, el presidente Duarte había declarado que, independientemente del resultado electoral, continuaría el diálogo con el FDR-FMLN como una muestra de sus "esfuerzos por encontrar un camino hacia la paz," y que su "voluntad de diálogo y humanización no terminará hasta ver que los alzados en armas se reintegren a la vida democrática." En la misma línea, el ministro de la presidencia, Julio Adolfo Rey Prendes, declaró que, aunque la Fuerza Armada estaba venciendo a la guerrilla "y algún día se terminará esto militarmente, nosotros deseamos que sea mediante soluciones políticas para acabar con esta violencia que sufre el pueblo." Incluso la Fuerza Armada exteriorizó su disposición a la reanudación de las pláticas. Según declaraciones del general Blandón, emitidas 2 días después de los comicios, en la Feria Internacional, el ejército "siempre ha apoyado los esfuerzos de paz que se hacen a nivel regional y nacional y, en este caso, desde un principio apoyó la gestión de paz del gobierno hecha en el marco constitucional." Y agregó: "es que ya el pueblo está cansado y quiere que realmente se le dé una esperanza de paz. Llevamos 5 años de guerra." A nivel internacional, los apoyos al proceso de diálogo se hicieron también más insistentes, sobre todo de parte de los países miembros de Contadora y de la social democracia europea, la cual instó al presidente Duarte a "cumplir con su compromiso de reanudar el diálogo con la oposición política y militar" aglutinada en el FDR-FMLN.

Por su parte, los frentes se apresuraron a reiterar su disposición a proseguir las conversaciones, indicándole al mandatario que ya no tenía razón de ser la excusa de que no contaba con mayoría en la asamblea legislativa como ar-

gumento para seguir postergando las pláticas. Como gesto concreto de tal disposición de diálogo, el FMLN ofreció poner fin a la campaña de sabotaje contra la economía a cambio de un acuerdo conjunto para que ambas partes dejaran de obtener nuevas armas.

A nueve días de haberse llevado a cabo las elecciones, el FDR-FMLN hizo llegar al presidente Duarte, por intermedio de Monseñor Rivera, una nueva propuesta tendiente a reiniciar el proceso de diálogo. La propuesta planteaba realizar en Perquín (Morazán) el 21 de abril una reunión al más alto nivel entre las partes. En contraste con sus declaraciones verbales respecto de su voluntad de diálogo, el presidente Duarte rechazó categóricamente la propuesta, calificándola de "diálogo táctico," y argumentó que no deseaba otra reunión "al estilo del encuentro de Ayagualo," que en su opinión los frentes manipularon "para hacer un mitin promocional de la guerra." En contrapartida, declaró que el gobierno analizaba la posibilidad de realizar en privado la tercera sesión de diálogo, para garantizar la cual estaba realizando una evaluación exhaustiva del proceso.

Más allá de la reticencia gubernamental a encaminar esfuerzos efectivos a una solución dialogada del conflicto, el obstáculo insuperable enfrentado por el proceso de diálogo siguió siendo la subordinación de toda posible salida política a la estrategia norteamericana de resolver la crisis por la vía militar. En el plano regional, el correlato de tales presiones lo constituyó la intensa campaña desplegada por la administración Reagan para obtener del Congreso la aprobación de 14 millones de dólares destinados a financiar la lucha de los contrarrevolucionarios nicaragüenses; al tiempo que, en las inmediaciones de la frontera honduro-nicaragüense, se desarrollaban los ejercicios militares "Ahuas Tara III" y "Universal Trek 85."

Los planes de la Casa Blanca, sin embargo, se vieron obstaculizados parcialmente por la reunión de Contadora realizada en Panamá el 11 y 12 de abril. Aunque, contrariamente a lo

programado, a la cita no asistieron los cancilleres del grupo, sino los vicescancilleres, y pese a los desacuerdos propiciados por El Salvador, Honduras y Costa Rica, finalmente se llegó a la aprobación de un comité *ad hoc* para la evaluación y seguimiento de los compromisos en materia política y de refugiados; una comisión de verificación y control en materia de seguridad y un comité *ad hoc* para la evaluación y seguimiento de los compromisos en materia económica y social.

Los inconvenientes que tales acuerdos hubieran podido ocasionar a la administración norteamericana, sin embargo, quedaron pronto opacados por la seria derrota que la cámara de representantes propinó el 23 a la política exterior del presidente Reagan hacia Centroamérica al rechazar la solicitud de ayuda de 14 millones de dólares para los "contras." Aparentemente, la decisión de la cámara habría sido bastante influida por la propuesta de paz del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, enviada por intermedio de los senadores demócratas Kerry y Harkin. En ella, Daniel Ortega se comprometía a garantizar la libertad de prensa, el pluralismo político y demás libertades fundamentales, así como a decretar una amplia amnistía para todos los rebeldes que entregaran sus armas, si Estados Unidos retiraba su apoyo a los "contras" y reanudaba las conversaciones bilaterales con Nicaragua.

Para el presidente Reagan, la derrota fue tanto mayor cuanto que la Casa Blanca había desplegado en las semanas precedentes un intenso cabildeo en los círculos legislativos y había desplegado una campaña propagandística desproporcional al monto solicitado. Sin embargo, aunque expresión del desacuerdo de importantes sectores del Congreso respecto del uso de ciertos instrumentos de la política de la administración en Centroamérica, el curso subsiguiente del debate sobre la región no auguraba que la Casa Blanca fuera a disuadirse de sus planes de estrechar el estrangulamiento económico del régimen nicaragüense o de incrementar la escalada de agresiones militares contra Managua.